

## ***De iurisdictione<sup>1</sup>***

***Jesús María Santos Vijande***

***Catedrático de Derecho Procesal***

***Magistrado***

Es comúnmente admitido por la doctrina que el concepto y límites del Derecho Procesal son susceptibles de una doble consideración: la normativa y la científica. En el primer caso, se pretende explicar un concreto sector del ordenamiento jurídico, partiendo, como *a priori*, de su carácter procesal. En el segundo, el esfuerzo consiste en representar con claridad el objeto de un particular quehacer científico o, con otras palabras, en establecer fundadamente la materia sobre la que versa nuestra disciplina.

Es evidente, de un lado, que el actuar del jurista debe abarcar ambos planos, pues son tan complementarios como imprescindibles. Pero, de otro lado, tampoco reviste duda -hay que decirlo en beneficio de la claridad- que el proceder "científico" del procesalista es posible tanto en el ámbito del estudio descriptivo y exegético de las normas procesales (plano normativo), como en el que se refiere al análisis de las ideas básicas y objeto de la disciplina (plano científico).

Pues bien, en el denominado "plano normativo" el iusprocesalista desarrolla una actividad que busca identificar las normas del ordenamiento incluidas en su disciplina para, acto seguido, examinar su

---

<sup>1</sup> *Con todo afecto hacia mi maestro, Andrés de la Oliva Santos, estas líneas tal y como fueron escritas hace ya dos décadas, con ocasión de mi concurso a la Cátedra de Derecho Procesal en esta entrañable Universidad de Extremadura.*

contenido, características y clases, las relaciones que entre ellas se dan, sus límites temporales y espaciales de aplicación, etc.

Este concreto modo de proceder se traduce en una no menos concreta forma de describir y definir el Derecho procesal. Así, por ejemplo, según DE LA OLIVA,

"el Derecho procesal es el conjunto de normas relativas a la estructura y funciones de los órganos jurisdiccionales, a los presupuestos y efectos de la tutela jurisdiccional y a la forma y contenido de la actividad tendente a dispensar dicha tutela"<sup>2</sup>.

Para GÓMEZ ORBANEJA se puede concebir el Derecho Procesal como

"el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la constitución de los órganos estatales de la tutela jurídica, las condiciones y forma del procedimiento establecido para ella y las condiciones, formas y efectos de los actos procesales"<sup>3</sup>.

Por su parte, PRIETO-CASTRO alude al

"conjunto de normas que regulan el proceso como medio para la finalidad de la tutela del orden jurídico y protección de los derechos subjetivos, intereses y situaciones, prescribiendo todo lo que afecta a la constitución y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a las condiciones de los sujetos que en él actúan y a los requisitos y efectos de los actos de unos y otros, constitutivos del procedimiento"<sup>4</sup>.

Es de rigor, sin embargo, señalar que nos parece más apropiado para esta ocasión extenderse en el llamado "plano científico". La razón es evidente: definir el Derecho Procesal indicando qué conjuntos de normas comprende presenta, por imperativo de la lógica, una exigencia apriorística insoslayable: adoptar una postura razonada, desde el punto de

---

<sup>2</sup> *Derecho Procesal Civil*, I, Madrid, 1995, pág. 35.

<sup>3</sup> *Derecho Procesal Civil*, I, Madrid, 1976, pág. 15.

<sup>4</sup> *Tratado de Derecho Procesal Civil*, I, Pamplona, 1985, pág. 42.

vista científico, sobre el ámbito o "estatuto epistemológico" del Derecho procesal, esto es, sobre las ideas básicas que informan y delimitan esta disciplina, para que así se advierta con claridad el porqué de la consideración de tales o cuales normas como genuinamente procesales.

En total avenencia con lo que decimos, es comúnmente aceptado que cualquier investigación sobre el concepto de Derecho Procesal, si quiere ser completa, debe considerar tres ideas fundamentales que, normalmente, no están definidas sino presupuestas por las leyes positivas. Nos referimos a los conceptos de jurisdicción, acción y proceso en torno a los cuales gira todo el contenido del Derecho Procesal. Esta afirmación de CALAMANDREI es exacta y a ella se ha atendido la generalidad de la doctrina para construir el concepto de nuestra disciplina.

La oportunidad de distinguir estos tres conceptos -continuaba CALAMANDREI- se alcanza rápidamente, nada más ver cómo se desarrolla y en qué consiste prácticamente la obra del Juez llamado a administrar justicia: a) En primer lugar, desarrolla una actividad típica, dotada de unos caracteres propios, y de unos fines específicos (jurisdicción); b) En segundo lugar, el Juez está llamado a resolver un problema entre hombres y frente al mismo se coloca como un tercero imparcial, que no crea por sí el problema sino que lo examina y lo resuelve en los términos en que, quien tiene interés en el mismo, acciona para formularlo y para someterlo (acción); c) Por último, antes de juzgar, se desarrolla una actividad por parte suya y por parte de quienes solicitan el juicio (proceso).<sup>5</sup>

De estos tres conceptos el más significativo para definir nuestra disciplina es el de jurisdicción. En efecto, aunque el Derecho Procesal se define como el conjunto de normas que regulan el proceso<sup>6</sup>, su objeto específico no es cualquier proceso sino, como puso de manifiesto FENECH

---

<sup>5</sup> Cfr. CALAMANDREI, *Instituciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código*, Trad. española de la 2ª ed. italiana a cargo de Sentis Melendo, I, Buenos Aires, 1962, pág. 109

<sup>6</sup> Cfr. GUASP, *Derecho Procesal Civil*, Madrid, 1977, pág. 31

<sup>7</sup>, el proceso jurisdiccional, es decir, el proceso a través del cual se desarrolla la función jurisdiccional del Estado en los diversos ámbitos del derecho sustantivo. Sea cual sea el camino que sigamos para hallar el concepto de proceso<sup>8</sup> abocamos siempre a la jurisdicción como diferencia específica de nuestro proceso con respecto a los demás tipos de proceso que se dan en el mundo de la naturaleza e, incluso, en el mundo jurídico<sup>9</sup>. Lo que ha llevado a que desde hace ya algunos años se hayan ido alzando voces que propugnan un cambio de la denominación "Derecho *procesal*" por la de Derecho *jurisdiccional*"<sup>10</sup>.

Así pues, la jurisdicción es un *prius* con respecto al proceso. Ahora bien, esta actividad, típica y sometida a unas características y finalidades propias, que se desarrolla por unos órganos específicos e independientes, sólo se pone en movimiento, normalmente, a instancia de parte -pública o privada- y se desenvuelve necesariamente a través de un cauce jurídicamente regulado que es el proceso jurisdiccional. Jurisdicción, acción y proceso son así conceptos correlativos que explican en lo esencial la realidad jurídica de la administración de justicia por el Estado<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. FENECH, *Notas previas para el estudio del Derecho Procesal*, en *Estudios de Derecho Procesal (con Carreras)*, Barcelona, 1962, pág. 41.

<sup>8</sup> *En esencia son dos los métodos que existen para hallar el concepto de proceso: el empírico o inductivo y el valorativo o deductivo* (Véase FENECH, ob. cit., págs. 38 y ss.; cfr. asimismo, GUTIERREZ DE CABIEDES, *Una nueva reflexión acerca del concepto de Derecho Procesal*, en *Estudios de Derecho Procesal*, Pamplona, 1974, págs 37 y 38.

<sup>9</sup> FENECH, ob. cit., págs. 40-41.

<sup>10</sup> Entre otros, véase MONTERO AROCA, *Introducción al Derecho Procesal*, Madrid, 1976, págs. 288 y ss.; BONET NAVARRO, *Derecho y Derecho Jurisdiccional (Conceptos)*, en *Escritos sobre la Jurisdicción y su actividad*, Zaragoza, 1981, pág. 29; GOMEZ COLOMER, *Reflexiones sobre las bases científicas de la parte general del Derecho Jurisdiccional*, en *Justicia*, 1989, III, pág. 569.

<sup>11</sup> Cfr. CORDON MORENO, *Introducción al Derecho Procesal*, Pamplona, 1994, pág. 18.

En torno a esta trilogía conceptual vienen girando desde hace tiempo las exposiciones sobre el concepto de Derecho Procesal. Por ello ajustaremos nuestra exposición a las mismas y, precisamente, en el orden expuesto, de acuerdo con la doctrina más característica.

## **I. Concepto de Jurisdicción**

Nuestras primeras reflexiones sobre el concepto de jurisdicción deben atender a la cuestión de la relatividad o no de dicha categoría jurídica, pues creemos imprescindible, desde un punto de vista estrictamente lógico, expresar nuestra posición al respecto, como única forma de justificar no sólo la idea de jurisdicción que aquí se va a defender, sino, antes que eso, como *a priori*, las pretensiones de validez que atribuimos al concepto de jurisdicción que se postula.

### **1. Concepto absoluto y concepto relativo de Jurisdicción**

Es sabido que, en el momento presente, la *communis opinio* propugna como nota esencial o definitoria y como objeto principal del Derecho Procesal la nota de "jurisdiccionalidad". Sin embargo, no se encuentra un asentimiento semejante a la hora de defender no ya tal o cual noción de jurisdicción, sino la existencia misma de un "sustrato radical" que permita no reducir a puro nominalismo un concepto, que, por otra parte, sí se esgrime como médula esencial del Derecho Procesal.

Es cierto que el actuar científico no desaparece, no pierde su condición de tal por el hecho de que su objeto sea mudable, al fin y a la postre nadie puede negar hoy en día que la ciencia es ciencia más por el método que emplea y por los límites gnoseológicos que se marca, que por el objeto sobre el que recae su estudio; pero también es innegable que los filósofos de la ciencia, para mantener la subsistencia autónoma de una rama del saber científico -no la actuación científica de tal o cual estudioso-, exigen que el quehacer del investigador recaiga sobre un objeto determinado o determinable, con perfiles propios, de modo que se pueda

hablar de la existencia de lo que se ha dado en llamar un "estatuto epistemológico" autónomo.

Lo que ahora se plantea no es sólo el carácter relativo o absoluto de la jurisdicción, sino que reparamos en la imperiosa necesidad de analizar tal cuestión, porque si lo jurisdiccional es lo definitorio o esencial del Derecho Procesal, esto es, lo que hace que el Derecho Procesal sea lo que es y no deje de serlo, pero, a la vez, la jurisdicción no es reconducible a unidad conceptual, se resquebrajan los cimientos mismos de nuestra disciplina o, por mejor decir, se reduce el actuar científico del iusprocesalista a lo que convencionalmente y en cada momento se estime oportuno. Por otra parte, enseguida veremos que, además de la razón puramente científica -en absoluto desdeñable- que nos impele a examinar la relatividad o no de la jurisdicción -razón científica que cabe predicar de cualquier otro elemento definitorio del Derecho Procesal que se pudiese postular-, existen otras motivaciones que, amparadas en la historia y en el propio ordenamiento vigente, fuerzan a preguntarse, sin incurrir en absolutismos ni pretensiones de exhaustividad, si, en verdad, la *iurisdictio*, con todas sus variadas manifestaciones, con toda la "accidentalidad" -en el sentido aristotélico- que la evolución de la sociedad y del Derecho comportan, no tiene al mismo tiempo un sustrato radical o una esencia última.

Sin más preámbulos, conviene indicar que se ha pretendido fundar la relatividad de la "jurisdicción" en las distintas acepciones de esta palabra, en la pluralidad de definiciones adoptadas -"tantas como estudiosos pretenden desentrañar las notas esenciales del concepto"- y, como razón última, se ha argüido que "el concepto mismo de jurisdicción es relativo, ya que, por pertenecer al Derecho público, su noción está en función variable del concepto del Estado"<sup>12</sup>. Estas ideas vertidas por FENECH, pero por muchos otros asumidas, exigen alguna matización en orden a precisar su verdadero alcance.

No seremos nosotros quienes defendamos la suficiencia de la tesis clásica, expresada con el aforismo *iuris dictio in sola notione consistit*, cuando se trata de distinguir la actividad típicamente jurisdiccional de

---

<sup>12</sup> FENECH, ob. cit., pág. 44.

otras actividades del Estado como la legislativa y la ejecutiva o administrativa. Sin embargo, sí queremos reparar en que, a lo largo de la historia, en todo ordenamiento, esto es, con independencia de la forma jurídica de organización de la sociedad de que se tratase -llamásele Estado, Monarquía, *Res publica*, etc.-, ha existido una actividad, expresión de la esencia misma del Derecho, que ha consistido y consiste en "decir el Derecho en el caso concreto", y que se ha denominado *iurisdictio* o jurisdicción. Este simple dato, tan conocido como unánimemente admitido, sirve para poner de manifiesto lo que SERRA ha llamado la "necesidad lógica" de la jurisdicción, confirmada dicha necesidad por el decurso histórico<sup>13</sup>.

A mayor abundamiento, no se trata sólo de que, por una parte, lo que hemos denominado "razón científica" y, por otra, una suerte de "necesidad lógica", aboguen en pro de un concepto de jurisdicción que merezca el nombre de tal, sino que también se trata, por añadidura, de que el propio ordenamiento español parte de una idea "absoluta" o "esencial" de lo jurisdiccional y, justamente por ello, exige del jurista una tarea de indagación que permita precisar qué es o en qué consiste radicalmente la "potestad jurisdiccional" -en expresión del art. 117.3 CE-.

Desde el punto y hora en que la Constitución impone el monopolio en el ejercicio de la función jurisdiccional, hay que concluir, si no se quiere incurrir en una petición de principio, que el ordenamiento concibe la actividad jurisdiccional como cualificada por un contenido material provisto de sustantividad propia. Más claramente: si, según la CE, sólo determinados órganos del Estado pueden ejercer la potestad jurisdiccional, y han de hacerlo con arreglo a criterios de independencia e imparcialidad, entonces no sólo no cabe pretender que lo jurisdiccional es lo que hacen los Jueces -dato desmentido por el propio art. 117.4i.f. CE-, pues el mandato de la CE quedaría reducido a la voluntad del legislador de turno, sino que, por ende, aparece de un modo palmario que el *prius*, la causa del monopolio en el ejercicio de la función, es la existencia de una actividad con un contenido material determinado.

---

<sup>13</sup> SERRA DOMINGUEZ, "Jurisdicción", en *Estudios de Derecho Procesal*, Barcelona, 1969, págs. 20-62. Cfr. en concreto, págs. 20-21.

Dicho de otra forma: existen jueces a los que se atribuye en exclusiva una tarea que no se define -la CE sólo describe esa tarea: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado-, porque se parte, como axioma, de que lo jurisdiccional tiene una sustancia propia. Entender lo contrario, es decir, que existe actividad jurisdiccional porque existen jueces que actúan, amén de contravenir el imperativo constitucional, privándolo de sentido -la exclusividad en el ejercicio de la función dependería de lo que el legislador, arbitrariamente, dijese que es o deja de ser jurisdiccional-, supone subvertir los más elementales principios de la lógica, confundiendo los efectos con las causas.

Esta exigencia constitucional de un concepto "absoluto" de jurisdicción fue advertida, con particular brillantez, por DE OTTO<sup>14</sup>, quien, no obstante, incurre, a nuestro juicio, en una imprecisión de expresión que puede inducir a confusión a la hora de interpretar el verdadero alcance de su propia tesis, cuando dice: "que el **moderno concepto de jurisdicción** está indisolublemente unido a la pretensión de que sea ejercida en exclusiva por Jueces y Magistrados independientes"<sup>15</sup>. Al respecto, hay que señalar que el autor, con excelente criterio, proclama la necesidad de "un concepto absoluto de jurisdicción, un concepto en el que ésta se identifique a partir de un determinado contenido material de la función misma, *con abstracción total de quién sea titular*"<sup>16</sup>. Al mismo tiempo, DE OTTO postula que la única nota que diferencia a la jurisdicción de cualquier otra función de aplicación del Derecho es la *irrevocabilidad* de la decisión con que la jurisdicción se ejerce<sup>17</sup>.

Importa advertir que en modo alguno se convierte en elemento esencial de la actividad jurisdiccional el monopolio exclusivo de su ejercicio por Jueces y Magistrados independientes, por más que tal circunstancia se vincule al "moderno concepto de jurisdicción", pues, de no ser así, carecería de sentido, de un lado, definir la Jurisdicción por la nota de irrevocabilidad (no entramos ahora en el acierto o no de tal

---

<sup>14</sup> *Estudios sobre el Poder Judicial*, Madrid, Ministerio de Justicia, 1989, pags. 17-18.

<sup>15</sup> *Ibidem*, pág. 16.

<sup>16</sup> *Ibidem*, pág. 17.

<sup>17</sup> *Ibidem*, págs. 19-20.



postura), y, de otro, negar expresamente que la independencia del órgano sea carácter sustancial del concepto que nos ocupa.

A nuestro juicio, lo que sucede es que DE OTTO, cuando habla de "moderno concepto de Jurisdicción", se está refiriendo en realidad a la "función jurisdiccional", en cuanto expresión post-revolucionaria de la teoría de la división de poderes. En este sentido, es indubitado que dicha teoría ha incidido grandemente en el perfeccionamiento de las "manifestaciones externas" y de las "condiciones para el ejercicio" de la Jurisdicción -v.gr., al exigir la independencia, inamovilidad e imparcialidad de Jueces y Magistrados- y, en consecuencia, ha contribuido a poner de manifiesto la autonomía y la esencia de lo jurisdiccional.

Sin embargo, tan importante como no desconocer la antedicha contribución es también reparar en que, a la hora de configurar la división de poderes y las distintas funciones del Estado, se parte, como a priori, de la existencia de actividades *materialmente* legislativas, administrativas y jurisdiccionales, esto es, ni LOCKE ni MONTESQUIEU crean *ex novo* tipos de actividad que hayan de desempeñar los órganos del Estado, sino que, cada uno con sus peculiaridades, estructura orgánicamente las funciones ya existentes, separándolas unas de otras.

Dicho con otros términos: no cabe negar -sería oponerse a la evidencia- que el "fenómeno jurisdiccional", con el paso de los siglos, ha experimentado una evolución que permite hablar, *lato sensu*, de un moderno o de un antiguo concepto de Jurisdicción. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, semejante evolución no sólo no desvirtúa la defensa de un concepto absoluto de Jurisdicción, sino que ratifica un postulado en tal sentido.

En efecto, hay que insistir en que, cuando aludimos al concepto absoluto de Jurisdicción, en modo alguno pretendemos defender, como si de una verdad metafísica se tratase -no es ése nuestro ámbito de razonamiento-, una idea de Jurisdicción ahistórica y atemporal, que incluya todas sus manifestaciones en todo tiempo y lugar. El Derecho, y dentro de él lo jurisdiccional, es producto de la actividad racional del hombre y, por tanto, si bien responde a un afán último de Justicia y a la necesidad auténtica de impartirla (afán y necesidad, éstos sí, siempre

presentes en la historia), se concreta progresivamente con el tiempo, según las exigencias de cada época y lugar, sufre una evolución o, si se quiere, con LEIBNITZ, el Derecho y lo jurisdiccional participan de la perfectibilidad propia de los productos humanos, de suerte que paulatinamente pueden experimentar un mejoramiento en sus manifestaciones más nimias.

En este sentido, el hecho de que defendamos el carácter absoluto del concepto de Jurisdicción no significa que pretendamos lo que en sí mismo creemos imposible, a saber: elaborar o asumir una idea de Jurisdicción que, como si de una ley matemática se tratase, abarcase todas y cada una de las manifestaciones históricas de lo jurisdiccional.

Sin embargo, una cosa es pretender un concepto de Jurisdicción exhaustivo, omnicomprensivo, quasimatemático y, en consecuencia, desconocedor de la riqueza de la realidad jurídica -no creo, con DE LA OLIVA, en la exactitud del Derecho y, por tanto, también con él, me parece temerario el intento de ofrecer una conceptualización rotunda de la materia que nos ocupa-, y otra, muy distinta, lo que precisamente la historia demuestra: una tendencia, una línea de progreso -no sin altibajos-, que permite, con el análisis de las variaciones "accidentales" del fenómeno jurisdiccional -ineludibles por la evolución de la sociedad y de sus formas de organización jurídica-, llegar a la conclusión de que la Jurisdicción tiene una esencia última que puede y debe ser desentrañada.

En el caso de nuestro ordenamiento ocurre, además, que el jurista se encuentra ante el deber de acometer tal esfuerzo, justamente porque la CE de 1978 establece el monopolio de la Jurisdicción por los Jueces y Tribunales, de suerte que, como queda dicho, lo jurisdiccional no es tal porque se encomiende a Jueces y Magistrados, sino que, porque existen actuaciones materialmente jurisdiccionales, existen Jueces y Magistrados que en exclusiva deben desempeñarlas.

En suma: no parece discutible que, cuando se trata de postular una idea de Jurisdicción, lo más complejo consiste en distinguir lo que es sustancia de lo que es accidente y, al respecto, como no se debe ignorar la incidencia de la historia en la progresiva determinación de qué es o deja de ser jurisdiccional, expondremos nuestras reflexiones considerando la

trascendencia que el Estado de Derecho (después "social de Derecho") ha tenido en la configuración legal o positiva de la Jurisdicción.

Este modo de concebir los efectos de la evolución del Derecho sobre la categoría que nos ocupa ("*iuris dictio*") nos lleva a reiterar nuestra discrepancia con FENECH, pues creemos que la historia, en lugar de abonar una idea relativa de Jurisdicción, lo que hace es ratificar su autonomía, su subsistencia como categoría propia y distinta de cualquier otra en apariencia similar.

Es de rigor advertir que las siguientes consideraciones sobre la idea de Jurisdicción no pretenden exponer con exhaustividad, ni siquiera con detenimiento, las muy variadas teorías y posiciones doctrinales al respecto. Parece más congruente con los fines de este trabajo que el candidato exprese sus ideas propias, no necesaria ni previsiblemente originales, acerca de qué es o deja de ser la Jurisdicción. Se trata, pues, de argumentar y reflexionar en torno a los motivos que nos impulsan a sostener un determinado criterio. Criterio que si en general sometemos a rectificación ante opiniones mejor fundadas, mucho más en lo que concierne a una materia tan compleja como la que ahora nos ocupa.

## **2. "Noción unitaria de Jurisdicción y "función jurisdiccional": método de análisis y estructura del concepto de Jurisdicción**

Pudiera parecer redundante, superfluo e inútil que en este momento, después de cuanto ya se ha dicho, nos preguntemos por el objeto de nuestra reflexión. Sin embargo, aunque abundemos en concreto sobre algo ya tratado *in genere*, y en este sentido se pueda hablar de redundancia, no creemos que quepa predicar de semejante cuestión la nota de inutilidad.

Pretendemos indagar sobre lo que CALAMANDREI llamó "noción unitaria de Jurisdicción"<sup>18</sup>, y no, ahora, sobre el concepto de función jurisdiccional, que, como queda dicho, presupone la existencia de una actividad materialmente jurisdiccional.

---

<sup>18</sup> Ob. cit., págs. 173 y ss.

Insistimos en que la teoría de la división de poderes, que comporta la adscripción de actividades dotadas de unidad sustancial (tipos de funciones) a conjuntos orgánicos (poderes), ha contribuido, sí, a explicitar la esencia de lo jurisdiccional en la medida en que ha revestido a los órganos encargados de tal función de unas características derechamente encaminadas a garantizar el más recto ejercicio de su cometido. Sin embargo, justamente esto pone de manifiesto que el "sistema de legalidad" -en expresión muy utilizada por CALAMANDREI- o, si se quiere, el Estado de Derecho lo que hace es contemplar una actividad y garantizar mejor su ejercicio (progresar, en suma), pero partiendo, como un *prius*, de que existe una actividad propia y distinta de cualquier otra llamada "*iuris dictio*". Así, sin perjuicio de que se pueda y se deba distinguir una función del Estado respecto de las demás, procede, en primer lugar, analizar qué es lo jurisdiccional.

Ahora bien; tan importante como delimitar el objeto principal de análisis es, me parece, considerar anticipadamente *cuál es la estructura o trabazón lógica del concepto de Jurisdicción*, es decir, a qué circunstancias hay que atender y cuáles hay que desechar para poder analizar correctamente y comprender en toda su magnitud el fenómeno jurisdiccional, distinguiéndolo de otras actividades jurídicas de dispar naturaleza.

A la hora de definir la Jurisdicción los estudiosos han atendido a circunstancias tan diversas como el fin que aquélla persigue, la forma de los actos con los que se lleva a cabo, los efectos de dichos actos, la actividad intelectual predominante en la actuación jurisdiccional, esto es, el juicio jurisdiccional, las características de los órganos encargados del *ius dicere*, etcétera.

Para identificar y definir lo jurisdiccional, hay que reparar, a nuestro juicio, tanto en el **fin** que persigue la Jurisdicción como en la **forma** de lograr ese fin.

En consecuencia, no nos parece acertado, y así lo hemos dicho, conceptualizar la Jurisdicción de un modo relativo, en atención a los órganos que la desempeñan y a los caracteres que a tales órganos atribuye el ordenamiento. Creemos, con CALAMANDREI, SERRA y DE OTTO

(por citar algunos ejemplos), que el estatuto orgánico de los Jueces y Magistrados y las garantías constitucionales establecidas para el ejercicio de su función (exclusividad, independencia, imparcialidad, inamovilidad, etc.) son accidentes, peculiaridades que garantizan el cometido, que incluso lo hacen difícilmente factible sin su presencia, pero que no son elementos constitutivos de la sustancia o esencia de lo jurisdiccional.

No reviste duda que la instauración del Estado de Derecho ha contribuido grandemente a identificar lo jurisdiccional y a mejorar el ejercicio de la Jurisdicción. Así, la escisión formal de dicha función respecto de las demás -con la correlativa implantación de la exclusividad en el cometido-, la atribución de independencia y la exigencia de imparcialidad en quienes la desempeñan son, a la vez, expresión y prueba de que lo jurisdiccional existe como actividad provista de sustancia propia. Incluso constituyen excelentes indicios de cuál es su naturaleza, pero sin que quepa identificar tales indicios, aisladamente o en conjunto considerados, con la esencia de lo jurisdiccional. Insistimos, pues, en que lo que es efecto y/o garantía no puede ser elevado a la categoría de causa y/o objeto de protección, respectivamente.

Del mismo modo, tampoco estimamos correcto que la sustancia de lo jurisdiccional radique en la forma o apariencia externa de los actos con que se manifiesta: providencias, autos y sentencias, fundamentalmente. Un criterio semejante permitiría a lo sumo una especie de identificación "tautológica" de lo jurisdiccional y, por añadidura, parcial, pues hay muchos actos jurisdiccionales que no se traducen en ninguna resolución judicial y que, sin embargo, nadie duda constituyen ejercicio de la Jurisdicción.

Esta tesis, además, en nada contribuye a responder a la pregunta de por qué un acto es intrínsecamente jurisdiccional (de hecho, elimina de raíz tal cuestión) ni, en consecuencia, es de utilidad para satisfacer una exigencia terminante del propio ordenamiento: la de delimitar sustancialmente la Jurisdicción, so pena de privar de sentido al mandato constitucional relativo al monopolio en su ejercicio. Abundamos en una idea ya expresada: si lo jurisdiccional "es" lo que los jueces hacen con forma de providencia, auto o sentencia, y por el hecho de revestir tal

forma, entonces la orden constitucional de exclusividad en el desempeño de la función quedaría desprovista de contenido imperativo, pues no tiene sentido afirmar que sólo los Jueces y Magistrados pueden ejercer Jurisdicción si al mismo tiempo se sostiene que el concepto de Jurisdicción sólo se predica de la actividad desempeñada por Jueces y Magistrados.

Por otra parte, si a "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado" no se le confiere un contenido esencial, habría que preguntarse qué diferencia, distinta de la mera voluntad del legislador, podría atribuirse a la función jurisdiccional respecto de las demás funciones que la ley asigna de modo expreso a Jueces y Magistrados en garantía de cualquier derecho (art. 117.4 CE).

En suma: se advierte con claridad que, si se pretende discriminar lo jurisdiccional en atención a la forma de los actos, el mandato constitucional del art. 117.3 queda reducido a lo que el legislador diga en cada caso, según su arbitrio, que es o no ejercicio de la Jurisdicción. Así, verbigracia, nada impediría que el legislador ordenase a los Jueces encargados del Registro Civil documentar por sentencia un matrimonio ante ellos contraído, de suerte que hubiese que considerar tal acto como jurisdiccional en ese caso, y no en la hipótesis de que ese mismo acto se realizase ante un alcalde.

También debemos descartar, ya en este momento, aquella tesis (v.gr., CARRERAS, FENECH) que discrimina lo jurisdiccional por la peculiar naturaleza del juicio, como acto típico de la Jurisdicción que se caracteriza por la "*auctoritas*", entendida ésta como saber socialmente reconocido en virtud de la razón y la imparcialidad del juicio<sup>19</sup>. En expresión de CARRERAS, la *auctoritas*, en cuanto tal, "es irreconducible a los conceptos administrativos de función y funcionario"<sup>20</sup>, pues el valor jurídico de la sentencia que dicta el Juez no depende de la potestad que se le ha entregado por el Estado merced a su condición de funcionario.

---

<sup>19</sup> D'ORS, *Una Introducción al Estudio del Derecho*, 2ª Ed., Madrid, 1963, pág. 19.

<sup>20</sup> CARRERAS, "Las fronteras del Juez", en *Estudios de Derecho Procesal* (con FENECH), Barcelona, 1962, pág. 110.

Sin negar la gran importancia de un postulado semejante desde el punto de vista de la legitimación sociológica y ética de los actos jurisdiccionales, no nos parece este criterio suficientemente expresivo o adecuado para advertir, en el orden de la técnica jurídica, la sustancia de lo jurisdiccional.

De un lado, la *iuris dictio* no se reduce a la tarea intelectual propia del juicio, sino que también, y de modo fundamental, exige la intervención de la voluntad, a veces incluso como elemento predominante cuando no exclusivo. Por otra parte, la actividad enjuiciadora no diferencia *per se* lo jurisdiccional de lo administrativo y/o legislativo, donde también tienen lugar indubitadamente actos de juicio en los que cabe exigir, desde el punto de vista de su legitimidad, la presencia de verdadera "autoridad".

*Item* más: si lo que define la Jurisdicción es la *auctoritas*, predicada de quien emite el juicio, se está concibiendo dicha categoría jurídica por los caracteres legalmente atribuidos a los órganos jurisdiccionales (no nos referimos ahora al estatuto funcional del Juez en sentido amplio, sino a las concretas notas de independencia, imparcialidad, inamovilidad, etc.), que, como ya dijimos, son manifestaciones o garantías de la Jurisdicción, pero no su esencia. Y en esta misma hipótesis sucede también que se concibe lo jurisdiccional en función de la concreta presencia de una suerte de "virtud" en cada concreto Juez o Magistrado. Esto último, como se puede comprender sin necesidad de mayor comentario, aunque deseable o incluso necesario para una buena impartición de Justicia, no es un criterio delimitador admisible desde la estricta técnica jurídica o, mejor, desde la necesidad constitucional de responder en Derecho a la pregunta sobre qué es o no es intrínsecamente jurisdiccional.

Cabe, en tercer lugar, que la *auctoritas* se predique genéricamente del juicio en sí, pero entonces hay que exigir de esta tesis que descienda a una mayor concreción, es decir, que reconduzca el antedicho término a otro u otros expresivos de algo desde el punto de vista técnico. Así, por ejemplo, la *auctoritas* podría traducirse o manifestarse en el efecto de cosa juzgada de las resoluciones judiciales -tal es la posición de SERRA cuando contempla la idea de autoridad en relación con el concepto de jurisdicción- o en una concreta finalidad que presidiese la actuación de

Juez y que persiguiesen todos los actos jurisdiccionales de éste, verbigracia, la tutela y realización del Derecho objetivo, etcétera.

En resumen: es evidente que, antes de exponer el concepto o noción unitaria de Jurisdicción que defendemos, hemos descartado tanto la concepción relativa de lo jurisdiccional como algunas teorías que, a nuestro juicio, no aciertan en sus concretos postulados ni, más fundamentalmente, en el modo mismo de enfocar el análisis del concepto en cuestión. Creemos, al respecto, que la especial dificultad radica en que no se trata de aprehender la naturaleza de un ente singular, sino que se trata de captar el elemento o elementos que permitan "reducir a unidad" o identificar una actividad plural y variada en sus formas y contenidos. Advertido lo cual, sin más preámbulos, entramos derechamente en la exposición de la idea de Jurisdicción que más nos convence.

### **3. La finalidad como sustancia de la Jurisdicción.**

Asumimos como propia aquella forma de abordar la noción de Jurisdicción, ya clásica en la doctrina, que busca y, a nuestro juicio, encuentra la sustancia de lo jurisdiccional en el fin que el Estado persigue con tal actividad. La "finalidad" es, sin lugar a dudas, una circunstancia unificadora con gran eficacia definitoria, máxime en casos, como el que ahora nos ocupa, en que lo que se pretende identificar es una actividad muy diversa en sus formas y contenidos. La corrección lógica de este proceder es innegable: si existe un fin común a toda la actividad jurisdiccional, bien pudiera ocurrir que la sola finalidad fuese expresión de su esencia, y también *explicación* de la forma y efectos de dicha actividad estrictamente considerada. Y utilizamos la palabra "explicación", porque, insistimos, desechada cualquier pretensión de obtener un producto conceptual exacto, perfecto, si se quiere, coincidimos con la opinión de que "los conceptos son instrumentos de comunicación, no objetos de culto".

No obstante lo que antecede, se ha dicho "que difícilmente pueden definirse las funciones del Estado por sus fines, aunque el mismo autor, no sin cierto grado de contradicción, señala también que "si hay algo que se



puede afirmar de todas las manifestaciones de la Jurisdicción es que con ellas se pretende -fin o *telos*- tutelar la observancia del ordenamiento jurídico"<sup>21</sup>.

Intentaremos demostrar que, si bien la definición de Jurisdicción que postulamos no se limita a enunciar una finalidad, sí que, partiendo de ella, se extraen otros caracteres que en buena medida son instrumentales del fin. Dicho de otra forma: *una cosa es que la "finalidad" sea más o menos expresiva -y expresiva es si se acierta en su elección- y otra, muy distinta, que no pueda constituirse en esencia y, por tanto, en condición y explicación de lo jurisdiccional y de sus características, respectivamente.*

Esto último guarda estrecha conexión con la principal crítica, según SERRA (citando a ZANZUCCHI), que cabe efectuar a las teorías que analizan el concepto de Jurisdicción por razón de su fin, sea éste el que fuere, a saber: "afirmar que la Jurisdicción tiene por fin, verbigracia, la observancia práctica del Derecho es, más que enunciar un concepto, describir un fenómeno (...); pero no los caracteres propios de la Jurisdicción, que quedan sin enunciar"<sup>22</sup>.

Creemos, a diferencia de SERRA, que, por una parte, atender al criterio de la finalidad es más que suficiente para identificar lo jurisdiccional en cuanto tal de un modo genérico, esto es, sin pretender que cualquier particular manifestación jurisdiccional o que toda concreta forma de ejercicio de esa función encaje perfectamente con la definición que se postule. Pero sucede además, en segundo lugar, que, aunque definir lo jurisdiccional no equivalga, *stricto sensu*, a la formulación de criterios para diferenciar los actos jurídicos jurisdiccionales de actos jurídicos de otro tipo, si se ha reparado en el genuino fin de la Jurisdicción, no es excesivo el esfuerzo deductivo que hay que efectuar para extraer las consecuencias necesarias que se siguen de dicha finalidad, que progresivamente se manifiestan en la historia como fruto del esfuerzo humano, y que se traducen en caracteres concretos de los actos típicamente jurisdiccionales.

---

<sup>21</sup> Cfr. DE OTTO, ob. cit., págs 24 y 39.

<sup>22</sup> "Jurisdicción", cit., pág. 34.

En virtud de lo que antecede, y sin que consideremos necesario detenernos en la exposición sistemática de las más relevantes teorías acerca de la Jurisdicción, hemos de sostener que, desde nuestro punto de vista, el fenómeno jurisdiccional responde, hoy más que nunca, al fin de tutelar y realizar el Derecho objetivo pronunciando el Derecho del caso concreto. Nos parece, al respecto, plenamente satisfactoria la explicación que da CALAMANDREI, cuando discrepa entre otros de CARNELUTTI, en relación con la progresiva acentuación y manifestación en la historia del Derecho de la antedicha finalidad esencial. No nos resistimos, por la claridad y brillantez de sus opiniones y porque las asumimos como propias, a reproducir lo sustancial de su pensamiento en este punto.

Así, proclama CALAMANDREI:

"La insuficiencia de la teoría según la cual la finalidad de la Jurisdicción civil sería la defensa de los derechos subjetivos (teoría que tendría en todo caso el defecto de valer sólo para el proceso civil y de no permitir una definición unitaria de la Jurisdicción (...), es fácilmente demostrable si se considera (...) que si la figura clásica y tradicional de la acción civil, especialmente en el campo de las acciones de condena, es aquella que surge de la lesión del derecho subjetivo, son cada vez más numerosos y cada vez más importantes, en el proceso civil de los Estados modernos, los casos, especialmente en el campo de las acciones de declaración de mera certeza y de las acciones constitutivas, en que la acción surge y se desarrolla como un derecho autónomo y en que se puede, por consiguiente, hablar de una Jurisdicción civil de mero derecho objetivo"<sup>23</sup>.

Añade el mismo autor poco después que

"siempre que el Estado (...), en el sistema de legalidad (...), siente la necesidad de intervenir en las relaciones jurídicas de los ciudadanos, para establecer oficialmente la certeza de preceptos dirigidos a los individuos, a fin de garantizar su observancia práctica, hay Jurisdicción: lo que puede suceder no solamente

---

<sup>23</sup> *Instituciones*, ob. cit., págs. 176-177.

cuando el precepto se haya transgredido ya sino también, y en medida cada vez más amplia cuanto más se acentúa la tendencia del Estado a restringir y a controlar la autonomía privada, cuando el precepto sea incierto o cuando, por la naturaleza indisponible de los intereses a los cuales el mismo se refiere, el Estado imponga, antes de que el mismo pueda ser puesto en ejecución, la declaración oficial de certeza. La extensión del llamado "intervencionismo" del Estado se hace, pues, sentir también sobre el concepto de Jurisdicción; el cual no se puede entender en su exacto alcance histórico si no se tiene en cuenta la creciente importancia que en el momento actual van asumiendo los casos de garantía *a priori*".

"El no tener en cuenta esta tendencia de la Jurisdicción es, en mi concepto, la laguna más grave de la teoría, bajo tantos otros aspectos sugestiva y fecunda, que Francesco Carnelutti ha colocado como base de su sistema; según el cual el fin del proceso estaría en la composición de la litis, entendiéndose por litis 'el conflicto de intereses cualificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro'".

"La función jurisdiccional surge indudablemente, en los albores históricos de la civilización, con propósitos de pacificación social (...), para dirimir los conflictos surgidos entre intereses individuales... Pero, en un estadio ulterior de la civilización, el contenido de la función jurisdiccional se amplía y se especifica: el Estado no se limita ya a intervenir en los conflictos para componerlos a toda costa y de cualquier modo, al solo objeto de impedir el empleo de la fuerza individual y de mantener la paz social, sino que quiere que la composición del conflicto (...) ocurra en la única forma que corresponde a aquellas normas generales y abstractas que el Estado, en un momento anterior, ha dictado para regular la conducta de los individuos: así, en el sistema de legalidad, la actuación del Juez se dirige, al mismo tiempo, a mantener la paz social, en cuanto dirime el conflicto de intereses individuales, y a garantizar la observancia de la ley, en cuanto lo dirime de conformidad con ella".

"Pero la evolución histórica no se detiene aquí; en el Estado moderno ("social de Derecho", decimos nosotros) (...) la observancia del Derecho se convierte, dentro de la Jurisdicción, en la finalidad dominante: tanto que puede haber ejercicio de la función jurisdiccional al solo objeto de asegurar la observancia del Derecho, aun en casos en los que no hay paz alguna que mantener, en cuanto no existe ningún conflicto de intereses entre las partes"<sup>24</sup>.

Esta larga transcripción pone de manifiesto que la sustancia de lo jurisdiccional consiste en su finalidad. Finalidad que, a lo largo de la historia, progresa sin desvirtuarse, esto es, se perfecciona en una evolución que, sin abandonar nunca el sustrato radical consistente en "decir el Derecho en el caso concreto", avanza adaptándose a la evolución de las formas de organización jurídica de la sociedad y a las propias necesidades de ésta. Dicho con otras palabras: abolida la justicia privada, la tutela y realización del Derecho objetivo habrá sido más o menos patente en el actuar jurisdiccional de cada época, pero siempre ha estado presente desde que la sociedad humana ha sido consciente de la conveniencia o, mejor, de la necesidad de que no sean los particulares quienes hagan cumplir las reglas por las que aquélla se rige.

Sentado lo que antecede, examinaremos brevemente cómo el expresado fin de la actividad jurisdiccional, por una parte, sirve para definir e "identificar" los actos jurisdiccionales y, por otra, se constituye en causa y a la vez en explicación satisfactoria de sus características.

Al respecto, una vez expuesto el fin que persigue la genuina actividad jurisdiccional -de acuerdo con la llamada tesis jurídico-objetiva de la Jurisdicción, ya clásica-, repara DE LA OLIVA en una importantísima aportación de CHIOVENDA, que considera "complemento" de la tesis citada: nos referimos a la idea de "alienitá", que certeramente traduce el mencionado autor como "desinterés objetivo", y que, según el sentir común, consiste en que la actividad jurisdiccional guarda siempre una última relación a algo ajeno. Con otras palabras: la Jurisdicción... aplica y realiza el Derecho porque le está encomendada esa aplicación o

---

<sup>24</sup> *Ibidem*, págs. 180 y ss.

realización, siendo siempre ajena al órgano jurisdiccional la materia sobre la que versa su actividad.

Frente a este último planteamiento se ha dicho (v.gr., SERRA) que el Juez, en el proceso, no resuelve únicamente sobre relaciones o materias que le son ajenas, sino también sobre normas que contienen preceptos de los que es directo destinatario: las normas procesales<sup>25</sup>. Razón por la cual, también se ha sostenido (BALLBE) que las normas procesales son de naturaleza administrativa<sup>26</sup>.

Las objeciones citadas se salvan, a nuestro juicio, con una reconsideración de la idea de "alienitá" que, a la vez, pone de manifiesto la capacidad que para definir la Jurisdicción tiene el fin a que la misma se ordena.

Pensamos que el "desinterés objetivo" no debe predicarse de la posición del órgano respecto de la materia, sino, más exactamente, de la actividad misma en relación con su fin último. Es decir: la "alienitá" es emanación necesaria del fin que define la Jurisdicción. En otros términos y sin incurrir en una petición de principio, pero quizá sí en una redundancia, hay que indicar lo siguiente: que el "desinterés objetivo" es inherente, intrínseco en toda actividad jurisdiccional por razón del fin único y exclusivo de tal actividad: porque el órgano jurisdiccional actúa con el único propósito de tutelar y realizar el Derecho objetivo diciendo el Derecho en el caso concreto, por esa razón y no por otra, su actuación es objetivamente desinteresada *ex definitione*, incluso en aquellos casos en que tiene que decidir sobre materias que, mírese como se mire, no le son ajenas.

Por lo dicho, aun cuando no vayamos a definir la Jurisdicción predicando el desinterés objetivo de los órganos que la desempeñan, no podemos menos de transcribir unas palabras con las que en todo coincidimos:

"El *ius dicere* de la Administración -cuando existe- siempre es instrumental respecto de sus propios fines: el *ius dicere* último y

---

<sup>25</sup> SERRA DOMINGUEZ, "Jurisdicción", cit., pág. 39.

<sup>26</sup> "La esencia del proceso", *R.G.L.J.*, 1947, pág. 46.

tendencial de la Jurisdicción sólo es instrumental respecto del Derecho objetivo y de los derechos subjetivos e intereses de los sujetos jurídicos, pero constituye el fin mismo de la Jurisdicción" (DE LA OLIVA)<sup>27</sup>.

A partir del planteamiento que venimos sustentando, se explican con claridad lo que para nosotros son **caracteres de lo jurisdiccional, consecuencias necesarias de la esencia de la Jurisdicción, pero no elementos únicos a partir de los cuales se identifique el concepto o se reduzcan a unidad las plurales manifestaciones de lo jurisdiccional**. Así, por ejemplo, la cosa juzgada material de que habla SERRA, la imparcialidad e independencia de los órganos jurisdiccionales, la irrevocabilidad o imperatividad inmutable a que aluden DE OTTO y REQUEJO, la presencia de un instrumento, el proceso jurisdiccional, donde se deben respetar insoslayables exigencias de Justicia como son la audiencia y la igualdad, etcétera.

En esta línea de pensamiento y sin pretensión alguna de exhaustividad, a la vez que no nos parece correcto definir lo jurisdiccional por la cosa juzgada material de algunas resoluciones judiciales, considerando que los demás actos jurisdiccionales -aquéllos sin fuerza de cosa juzgada material- lo son "por conexión", sí consideramos perfectamente razonable entender esa característica de algunos actos típicos de la Jurisdicción como emanación lógica, aunque no por ello necesaria en todo caso, del fin que persigue lo jurisdiccional.

Algo parecido ocurre con la llamada tesis de la irrevocabilidad de las decisiones judiciales, que, elaborada en torno a los conceptos de cosa juzgada formal y material -partiendo de la tesis de SERRA, en España, y de ALLORIO, en Italia, pero ampliando sus planteamientos-, diferencia los actos jurisdiccionales de los materialmente administrativos "por el carácter inalterable de la decisión (cosa juzgada formal)" -obsérvese la imprecisión conceptual, pues en realidad se está refiriendo el autor a uno de los aspectos de la cosa juzgada formal: el que el propio juez esté vinculado por las resoluciones que dicta (invariabilidad de las resoluciones)-, y por "la fuerza del pronunciamiento para obligar a todos como

---

<sup>27</sup> *Derecho Procesal Civil*, ob. cit., I, pág. 83.

acto de concreción imperativa del Derecho en un caso concreto, excluyendo la posibilidad de volver a tratar y decidir sobre el mismo objeto ya resuelto de manera firme (cosa juzgada material)" <sup>28</sup>.

Aun con independencia de que hay actos típicamente jurisdiccionales que no reúnen tales características (el Juez puede revocar de oficio el auto de procesamiento, alzar el embargo indebidamente practicado, etc., etc.), a lo que en el fondo aluden estos autores (como ha expresado REQUEJO<sup>29</sup> al desarrollar la tesis de DE OTTO) es, con palabras de DE LA OLIVA, a que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, "la Jurisdicción viene a diferenciarse de la Administración por ser aquélla la última instancia del *ius dicere*"<sup>30</sup>. Pero esto, según nuestro criterio, no es esencia, sino manifestación o consecuencia necesaria del fin que persigue la Jurisdicción. Justamente porque se atribuye en exclusiva a la Jurisdicción la tutela y realización del Derecho objetivo, ésta tiene el poder de revisar en última instancia los actos de creación y aplicación del Derecho de los restantes poderes públicos y de los particulares.

Ahora bien; está, digamos, "vocación de irrevocabilidad" de las decisiones jurisdiccionales, que perfectamente se puede incluir en una definición que comprenda caracteres de lo jurisdiccional, olvida toda referencia al proceso jurisdiccional, que, como instrumento necesario de la decisión irrevocable informado por los principios jurídico-naturales de audiencia e igualdad, se compone de una sucesión de actos, también jurisdiccionales, que, aunque se ordenan al logro de una decisión última, no se traducen, muchos de ellos, en resolución judicial alguna, siendo también, muchos otros, esencialmente revocables y desprovistos de fuerza de cosa juzgada.

Ya dijimos que no vamos a detenernos sistemáticamente en el análisis de éstas u otras posiciones doctrinales también clásicas. Nos parece, empero, que las precedentes consideraciones pueden permitir, al margen de objeciones concretas, apreciar que nuestra discrepancia

---

<sup>28</sup> DE OTTO, ob. cit., pág. 19.

<sup>29</sup> REQUEJO PAGES, *Jurisdicción e independencia judicial*, Madrid, C.E.C., 1989.

<sup>30</sup> *Ibidem*, pág. 83.

estriba en una razón de fondo: el modo de concebir, no ya sólo la Jurisdicción, sino la aproximación intelectual a su concepto.

Hemos querido centrar esta parte de la exposición en la finalidad de la Jurisdicción por su carácter radical y también con el afán de insistir en que reflexionar sobre el fin de lo jurisdiccional no se reduce a describir un fenómeno sin enunciar sus características. Al contrario, lo que sucede frecuentemente es que se enuncian características queriendo elevarlas al rango de concepto, desconociendo las causas y, a veces, confundiéndolas con sus efectos.

Congruentes con lo que antecede, es suficiente para identificar la Jurisdicción decir que consiste en garantizar la observancia práctica del Derecho objetivo, pronunciando el Derecho en el caso concreto con desinterés objetivo. Sin embargo, con expresión de la sustancia de lo jurisdiccional, pero de un modo más descriptivo, también es posible entender por Jurisdicción lo siguiente: la tutela y realización del Derecho objetivo al decir el Derecho del caso concreto con desinterés objetivo, sirviéndose de un proceso que culmina con una declaración de voluntad, de vocación irrevocable, emitida por un órgano público, imparcial e independiente.